



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

CAUSA N°50287/2015

AUTOS: “GREEN ROCK SRL c/ AFIP s/IMPUGNACION DE DEUDA”

En la Ciudad de Buenos Aires a los _____, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por GREEN ROCK SRL contra la RESOLUCIÓN N° 043/14 (DI CRSS) dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos que rechazó la solicitud de revisión incoada por la actora contra la RESOLUCIÓN N° 1646/2013 (DV JBSS-DI CRSS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante la cual ratifica la multa impuesta que asciende a la suma de \$3.604,85 según liquidación N°SCT/001/2012/00046840.- Ello, en virtud de la mora en el pago de aportes y contribuciones correspondientes al período fiscal 05/2011.

La parte actora en su escrito recursivo manifiesta que el art. 15 de la ley 18.820 afecta normas de jerarquía constitucional (arts. 17, 18 y 75 inc.22 CN), solicitando se la exima del cumplimiento de la obligación del depósito previo atento comprometería el curso normal de las actividades de la empresa, viéndose impedida de cumplir con sus obligaciones regulares. Asimismo, plantea la nulidad de la resolución apelada y de la liquidación, alegando la falta de causa del acto administrativo por haberse integrado lo adeudado y por lo tanto no existir perjuicio fiscal. Por último, invoca la falta de motivación del acto administrativo y la nulidad de la sanción impuesta por inexistencia del elemento subjetivo.

Ahora bien, el art. 15 de ley 18.820 (modif. por ley 23.473), establece la exigencia del depósito previo a fin de habilitar la instancia judicial, requiriendo su cumplimiento, en orden a los argumentos que se expondrán a continuación.

El art. 12 de la ley 19.549 (de Procedimientos Administrativos) dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad: su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario”.

Hutchinson señala que la presunción de legitimidad que ostentan los actos de la administración supone que los mismos han sido dictados de conformidad al ordenamiento.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Por ello, es al particular a quien corresponde la carga de probar su eventual invalidez; y, con cita de Juan C. Cassagne, expresa: “Si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento (sic) de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común” (cf. Tomás Hutchinson, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, pág. 109).

Así, el acto administrativo alcanzado por esta presunción reviste carácter obligatorio y exigible, de lo cual deriva la potestad que le asiste a la administración de hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros (ejecutividad).

Sin embargo, ello no implica que los particulares no puedan cuestionar su legitimidad mediante los recursos administrativos y/o judiciales que, como se ha dicho, no suspenden la ejecución del acto, salvo que una norma expresa así lo ordene.

Esta peculiaridad del acto administrativo lleva a que el recurso de apelación que autoriza el art. 174 de la ley 11.683 (de Procedimiento Tributario) contra la sentencia del Tribunal Fiscal se conceda “en ambos efectos”, dejando expedita la vía judicial al Fisco para ejecutar la deuda impositiva determinada, si el impugnante no acredita haber efectuado el depósito previo dentro de los treinta (30) días de notificada la sentencia o la resolución que aprueba la liquidación.

En el ámbito previsional, en cambio, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechaza la impugnación de una determinación de multa por mora en la integración de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social tiene efecto “suspensivo”, toda vez que la misma sólo se puede ejecutar si el recurso se desestima -a través de una resolución fundada- por incumplimiento del depósito previo, o cuando el Tribunal no exime al obligado por imposibilidad de pago. En este supuesto, la posibilidad de ejecutar el crédito queda supeditada a la suerte que le depare la sentencia al recurso instaurado.

En síntesis, si bien el “depósito previo” constituye en el procedimiento tributario y en el previsional un requisito de admisibilidad del recurso deducido, en el primero su cumplimiento está sujeto a un plazo fatal -so riesgo de tornar ejecutable el crédito reclamado- mientras que en el segundo, es el Tribunal quien mediante una resolución fundada declara cumplida -o no- la obligación legal. Por ende, las causales que eventualmente se invoquen para exceptuarse del pago previo en el ámbito previsional deben meritarse con criterio restrictivo, a la luz de los principios de igualdad ante la ley y de justicia distributiva que enmarcan el análisis de la presente cuestión.

La exigencia del solve et repete -como señala Giorgio Tesoro- constituye una más vigorosa y penetrante especificación de la ejecutoriedad del acto administrativo; el acto de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

determinación no sólo es ejecutivo -como todos los actos administrativos- sino que su legitimidad no puede ser discutida sin previo y efectivo cumplimiento.

La regla del depósito previo, entonces, no es ni caprichosa ni arbitraria. Constituye, por el contrario, una razonable derivación del interés público que persigue el derecho tributario y uno de los pilares en el que se asienta la eficacia de la gestión fiscal del Estado.

Se ha señalado -en este sentido- que la máxima solve et repete tiene como único fundamento las impostergables necesidades de las finanzas, por lo que la validez del acto administrativo de determinación impositiva está fundada en razones de orden y seguridad públicos, y su necesario corolario es la regla que impone el respeto y la obligación de pagar el impuesto para seguir reclamando por las vías legales (cf. Roberto Tamagno, “La determinación tributaria”, Enciclopedia Jurídica Omeba, T.VII, pág. 771).

Asimismo, se ha dicho que “es posible sostener que el “solve et repete” recibe su convalidación en razones de interés general similares a las que fundan otras prestaciones obligatorias de los ciudadanos, tales como el deber de emitir el sufragio, de defender a la patria con las armas, o el de soportar restricciones en los derechos patrimoniales en pro del interés público, situaciones todas ellas en las que la realización del bien común justifica el sacrificio del bien particular” ... “Puede concluirse entonces que el principio “solve et repete” constituye un resorte que el Estado puede legítimamente utilizar en favor del interés colectivo ínsito en la celeridad y eficacia de la percepción de los impuestos, aunque para ello sea menester ocasionar las dificultades individuales que suponen el deber de pagar primero para reclamar después” (cf. Reflexiones sobre el principio “solve et repete”; Alejo A. Martínez Araujo, Luis A. Vedoya y Martín López Olaciregui; en La Ley del 14/10/97, pág. 2).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de monto excepcional, en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder -Fallos 288:287; 308:381). Sin embargo, esta excepción sólo es aplicable cuando “las constancias de autos no permitan descartar, por caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la multa impuesta”, por ello se exige





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

que tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos de criterio agregados a los autos y se estiman insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.S.J.N., Fallos, 225:201; 249:221; etc.).

Con lo cual, y atento lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la norma cuestionada por la parte actora, y toda vez que resulta insuficiente la manifestación vertida por la administrada, invocando la imposibilidad de pago inculpable del depósito previo exigido por la ley, lo cual sólo podría acreditarse mediante balances documentados, informes contables, dictámenes actuariales, etc. que conduzcan al convencimiento por parte del tribunal de que dicho impedimento es real y no ficticio. No siendo suficiente a tal efecto el ofrecimiento de prueba pericial contable, a fin de verificar que el pago de depósito previo importaría una afectación al normal funcionamiento de la empresa, corresponde –por las razones señaladas- desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Finalmente, y de acuerdo al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. y el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I.”, sentencia del 05/10/04 -en la que remite a los fundamentos vertidos por la minoría en los precedentes “Farmacia España” (Fallos 323:1557) y “Asociación de Trabajadores del Estado” (Fallos 323:2349)-, deben imponerse las costas al recurrente vencido.

Por ello, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, y 12 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.473, con costas a cargo del recurrente vencido.

En cuanto a la regulación de honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pendientes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo” (voto del Dr. Carlos Fayt) CSSJN, T 315 P 1620.

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (conf. Doctrina art.1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimientos Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa, Sent. Del 4 de septiembre de 2018) y se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 1 UMA (\$10.400 valor conf. Ac.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#27147205#358374371#20230411101930287



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

25/2022). A la representación letrada de la parte demandada se le regulan 2 UMA equivalente a PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$29.866 –valor UMA 14.933 conf. Ac. 9/2023). Importes a los que se les adicionará el IVA en caso de corresponder (Cfr. Excma CSJN en el Fallo “Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación” sent del 16/06/03, Fallos 3161533).

A mérito de lo antes expresado, propongo lo siguiente: 1) **Declarar desierto** el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, y 12 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.473; 2) Con costas a cargo del apelante (Art.68 CPCCN), 3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 2 UMA equivalente a PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$29.866 –valor UMA 14.933 conf. Ac. 9/2023). Importes a los que se les adicionará el IVA en caso de corresponder (Cfr. Excma CSJN en el Fallo “Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación” sent del 16/06/03, Fallos 3161533).

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

No comparto la propuesta de mi distinguido colega de Sala.

En autos la empresa GREEN ROCK SRL impugna la Resolución de AFIP N° 43/2014 que, al confirmar una anterior, impuso una multa por mora en el pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Explica que **la demora obedece a la grave situación económica por la que atraviesa.** En su opinión no existe base subjetiva para aplicarle una sanción por mora como la impuesta el 10 de enero de 2014. Solicita asimismo que se la exima del depósito previo que impone el art. 15 de la ley 18.820 pues efectuarlo podría comprometer el curso normal de sus actividades y se vería impedida de cumplir con sus obligaciones regulares por lo cual **promueve la formación de un incidente a fin de acreditar la imposibilidad de pago alegada.**

Entiendo que debe procederse a la apertura de la presente instancia.

Si bien el Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que la exigencia contenida en el artículo 15 de la ley 18.820 no es inconstitucional ni lesiona las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101 y sus citas; 288:287; 296: 57 entre otros) el largo tiempo transcurrido desde la notificación de la suma adeudada (14/09/2012) me llevan a propiciar la apertura de la presente instancia a fin de salvaguardar el derecho de defensa que en nuestro ámbito cuenta con tutela constitucional (art. 18 de nuestra Carta Magna) respondiendo, por otra parte, al principio de seguridad jurídica dado los efectos negativos que acarrea extender en el tiempo una situación irresoluta.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, en su memorial de agravios la impugnante explica que el organismo actuante la intimó a abonar una multa por haber incurrido en mora en el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social por el periodo fiscal mayo 2011 pero sin considerar las graves dificultades económico financieras por las que tuvo que atravesar y que determinaron se incurra en atrasos en el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales.

La situación planteada determina, a juicio de la apelante, que los actos administrativos aquí recurridos sean nulos pues no se tuvo en cuenta ciertas circunstancias que debieron haber influido para que la deuda oportunamente determinada fuera dejada sin efecto. Concluye la impugnante expresando que en realidad al haberse efectivizado el pago no existió perjuicio económico para AFIP motivo por el cual la intimación y aplicación de multa carecen de causa y por lo tanto resulta nulo.

La parte demandada rechaza los argumentos vertidos por su contraria afirmando que los mismos no constituyen una crítica concreta y razonada en los términos exigidos por el artículo 265 del CPCCN.

No advierto que asista razón a la apelante.

Dentro de la disciplina administrativa las multas se aplican por la sola contradicción entre la conducta y la norma que impone el deber incumplido, sin atención a la intencionalidad del infractor (CFSS, Sala I, sent. def. 97.552, 05/04/02, Pesquería Marplatense c/AFIP”).

Precisamente, en el caso que nos ocupa, la conducta tipificada como irregular se configura al incurrir GREEN ROCK SRL en mora en el pago de aportes y contribuciones, situación reconocida en el memorial de agravios que se encuentra contemplada por el art. 8º de la resolución 1566/2004, no pudiendo aceptarse que nos encontremos ante un acto administrativo carente de causa y/o que adolezca del vicio de nulidad.

En efecto el artículo 14 de la ley 19549 establece que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: A) Cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre el agente, o por simulación absoluta. B) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspire su dictado. En otras palabras, para que un acto administrativo sea declarado nulo es necesario que sea antijurídico, lo que no sucede





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

con la resolución aquí atacada siendo el vicio denunciado subsanable mediante el recurso de apelación presentado.

El Superior Tribunal de la Nación ha señalado que resulta justificado que las normas tributarias contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad pues gravitan en la percepción de la renta pública (CSJN. 03/02/93, “Madero Unzué, Sara c/Demaría Sala y otro”, Fallos 316:42).

En virtud de lo antes expuesto propongo: declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmando la resolución recurrida. Las costas correrán a cargo de la apelante (art. 68 CPCCN) Por último, fijar los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora, por sus trabajos ante esta instancia, en 6 UMA (\$ 89.598) y 4 UMA (\$59.732) respectivamente (CSJN Ac. 09/2023 y art. 1255 Cód. Civ. y Ccial de la Nación).

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Carnota.

En mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmando la resolución recurrida. 2) Las costas correrán a cargo de la apelante (art. 68 CPCCN) 3) Fijar los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora, por sus trabajos ante esta instancia, en 6 UMA (\$ 89.598) y 4 UMA (\$59.732) respectivamente, conforme CSJN Ac. 09/2023.Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

PAR

